

te diputados, número que forma el *quorum* de ella; que si en las elecciones de Diputados por el Distrito de Amealco hubo vicios, constando que realmente fueron electos por tal Distrito, solo á la Legislatura del Estado toca, como cuerpo electoral, calificar y apreciar estos vicios: que si al hacerse la declaración de Gobernador, la Legislatura infringió el artículo 77 de la Constitución del Estado; esta infracción por si sola no puede ser objeto de amparo de garantías, sino de apreciación de la misma Legislatura como cuerpo electoral. Por todas estas consideraciones y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: 1º que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Queretaro que amparó á los quejosos; 2º: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Próspero C. Vega y á los por él representados, contra los efectos de las leyes de 24 de Febrero y 29 de Mayo del año próximo pasado, expedidas por el Gobernador y la legislatura del Estado de Queretaro.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Añza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 20 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## JUICIO

*Que ha promovido en el Juzgado 2º de Distrito de México el Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante, contra la hacienda pública, sobre el pago de la cantidad de veinticinco mil pesos.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor que suscribe en el juicio que ha promovido el Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante, contra la hacienda pública, sobre el pago de la cantidad de veinticinco mil pesos, que dice haberle prestado al extinguido convento de San Agustín, con hipoteca de la casa número 5 de la calle del Niño Perdido, supuesto el estado del juicio, ante V. dice: que ha recibido dos instructivos; el uno con fecha tres del corriente, en que se le hace saber la sentencia definitiva, por la cual se declara, que la hacienda pública es deudora al expresado Dr. Aguilar, de la cantidad que le demanda, sin causa de réditos ni el pago de las costas causadas en el juicio; y el segundo instructivo le impone de las dos comparecencias puestas por el repetido Aguilar, que habiéndose conformado primero con el fallo, apeló despues de él por no estar conforme sobre el punto de costas.

El que suscribe en cumplimiento de su deber, tiene que ejercitar el recurso de alzada contra la resolución que declara deudor al fisco del valor de la escritura en que se apoya la demanda, por serle perjudicial, supuesto que importa la declaración de que los derechos del demandante, son enteramente legítimos en contra de la hacienda pública; pues si el que suscribe propuso por vía de avenimiento una transacción en los términos que se espresan en la junta celebrada ante ese Juzgado, no importa el reconocimiento absoluto de la justicia del Padre Aguilar, quien rehuzó tal propuesta, quedan-

do en consecuencia sin efecto, y por consiguiente espeditas, las escepciones que favorecen al fisco para no considerarse deudor. Por estas razones, el que suscribe apela del fallo que se le ha notificado y pide á V. remita los autos á la superioridad, dando por admitido el recurso de alzada en el efecto legal que corresponde.—México, Noviembre 7 de 1871.—*Francisco G. Moctezuma.*

*Sentencia del O. Juez de Distrito.*

México, Octubre 30 de 1871.—Visto este juicio ordinario seguido por el Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante, contra el fisco federal como subrogatario en los derechos y obligaciones del clero, demandándole la cantidad de veinticinco mil pesos, que le debía la provincia de Agustinos de esta ciudad, y hoy dice, el fisco federal, por la subrogacion que con arreglo á las leyes de reforma ha hecho en aquellos derechos y obligaciones. Vistas las demas constancias del expediente y cuanto mas ha sido necesario ver. Examinado el mismo expediente, resulta justificado; primero: que el Dr. Aguilar y Bustamante segun la escritura que presentó, otorgada el 25 de Noviembre de 1851, con los requisitos legales de aquella época, por el Provincial de Agustinos de esta ciudad ante el Notrio público C. Francisco Calapiz, entregó al mismo Provincial la suma de veinticinco mil pesos, á depósito irregular, por cinco años, sin causar réditos, y con hipoteca expresa y especial de la casa número 5 de la calle del Niño Perdido, perteneciente á la provincia referida. Segundo: que el 23 de Junio de 1856, el mismo Dr. Aguilar prorogó al Provincial citado, al plazo para la entrega del depósito, por otros tres años mas, y que desde esa fecha hasta el pasado de 1870 en que demandó al fisco el capital, réditos y costas en juicio ordinario, no habia hecho gestion alguna. Tercero: que el fisco, posesio-

por las leyes de 12 y 13 de Julio de 1859 y otras, de los bienes llamados eclesíasticos, vendió el 2 de Marzo de 1861 á D. Maunel Romero Rubio, mediante la respectiva redencion de su valor, la casa número 5 mencionada antes, sin hacer referencia del gravamen que reportaba, todo lo cual consta en el expediente de adjudicacion, que este Juzgado para mejor proveer pidió al Ministerio de Hacienda, y con citacion de las partes corre agregado al mismo expediente. Cuarto: que puesta la demanda ante el Juzgado primero de Distrito, su Promotor fiscal, sin contestarla, promovió un artículo que fué declarado y confirmado por el superior en el fallo respectivo, y Quinto: que habiendo pasado el espediente al segundo Juzgado de Distrito por recusacion del primero, el Promotor fiscal de aquel recibió el expediente y lo retuvo en su poder hasta que en virtud de rebeldía lo devolvió sin contestacion ni objeto de ninguna clase; y de todo lo dicho se sigue, que el Dr. Aguilar y Bustamante, ha justificado plena y legalmente con un instrumento público, otorgado con los requisitos legales y bastante para hacer fé, (leyes 1ª y 114 tit. 18 part. 3ª) haber sido acreedor de la Provincia de Agustinos, y hoy del fisco federal, por haber entrado á su dominio con arreglo á la ley de 12 de Julio de 1859 todos los bienes que el clero habia administrado, y por haberse hecho responsable en el artículo 81 de la ley de 5 de Febrero de 1861, á las cargas que aquellos bienes reportaban hasta el 17 de Diciembre de 1857. Y aunque es verdad que por la hipoteca especial y expresa, el D. Aguilar pudiera haber perseguido la casa hipotecada, tambien es cierto que con arreglo á la ley 14 tit. 13 part. 5ª, pudo con la accion personal reconvenir al deudor principal para dejar en paz, como dice la misma ley, al poseedor de la casa. Por estas consideraciones y con fundamento de las leyes citadas, se declara: que la Nacion ó el fisco federal es deudor al Dr. Aguilar y Bustamante, y debe pagarle, los

veinticinco mil pesos que le demanda, sin hacer mérito de réditos y costas; aquellos por no estar convenidos y gozar el subrogatario de todos los derechos que gozaba aquel en cuyo lugar se subrogó, (Escricho artículo Subrogacion), y no las costas, por ser doctrina generalmente recibida por los Autores, (Alfaro de oficio fiscal, gloza 18, número 36 con otros que cita,) que el fisco, ya litigue como reo, ó como actor, no se le condene en costas. El C. Juez 1º de lo civil, funcionando como de Distrito por la inhibición de los propietarios: así lo proveyó y firmó: doy fé;—*Juan M. Maldonado.*—*Agustín de Vera.*

*Pedimento fiscal del Tribunal de Cicuito.*

El fiscal dice: que con escrito fecha 4 de Octubre de 1870, se presentó al Juzgado de Distrito el Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante, refiriendo que el ex-convento de S. Agustín de esta ciudad le era deudor de veinticinco mil pesos, según refiere la escritura que acampañó, á cuya solución debía obligarse el fisco, una vez que se había subrogado en lugar del deudor; concluyendo con pedir que así se determinara, *haciéndole pagar real con la misma finca hipotecada.* El C. Promotor fiscal á quien se corrió traslado de la demanda, esquivó primeramente contestarla, y después se promovieron varias dudas y artículos de que el Tribunal tuvo conocimiento oportuno, cuyas resoluciones expeditaron la respuesta fiscal, reducida, á que supuesta la hipoteca constituida, debía el actor ejercitar su acción contra el actual poseedor de la finca primero que contra el fisco; esta contestación se hizo saber al Dr. Aguilar, á consecuencia de lo cual el Juzgado mandó convocar una junta para procurar un arreglo, pero no pudo conseguirlo según indica el acta, porque habiendo propuesto el C. Promotor que la casa hipotecada fuese entregada en pago al deu-

dor, devolviéndose al adjudicatario las mismas especies que había dado por ella al Gobierno; el Dr. Aguilar manifestó que no le convenía la propuesta, y en tal virtud se mandó dar cuenta con citación, para pronunciar sentencia, antes de lo cual, y para mejor proveer, el Juzgado pidió al Ministerio de Hacienda copia certificada del expediente de adjudicación de la casa número 5 de la calle real del Niño Perdido, cuya finca era la hipotecada; y una vez remitida la copia, fué pronunciado en 30 de Octubre del año próximo pasado el fallo de 1ª instancia, por el que se declara: *que la Nación ó el fisco federal, es deudor al Dr. Aguilar y Bustamante, y debe pagarle, los veinticinco mil pesos que le demanda;* de cuya resolución el C. Promotor interpuso el recurso de apelación, que fué admitido, subiendo en consecuencia los autos á esta Superioridad.

Lo que se advierte desde luego, es, que la sentencia ha querido favorecer al actor hasta un grado, que ni este se atrevió á pretender; por que en la demanda, terminantemente pide *que se le haga pagar real con la misma finca hipotecada,* mientras que la sentencia, según la mas obvia inteligencia, manda verificarlo en moneda; diferencia tan notable, que excusado es detenerse en manifestarla. El Juez debió ceñirse á los términos de la demanda, y si la encontraba justa, mandar se hiciera como en ella se podía, es decir, que se entregara la casa; mas nunca avanzar hasta mas de lo que se pretendió por el acreedor, quien sin duda tuvo presente, que si la Nación había entrado al dominio de los bienes que fueron del clero, ni recibió el valor de ellos en numérario, ni podía pagar con otras especies que con las recibidas.

Por esto es, que la propuesta de arreglo presentada por el C. Promotor en la junta, no solo era equitativa, estrictamente justa y conforme con la demanda, de manera que no es comprensible la repulsa del Dr. Aguilar, cuando se le otorgaba lo que había pedido; y por lo mismo, desde este momento

no tuvo razon para continuar el litigio, y debe ser castigado con la pena señalada á los que así se conducen.

Partiendo del principio incuestionable de que la Nacion deberia pagar la referida deuda con lo mismo que recibió del deudor, á lo mas se podia otorgar que la demandada lo fuese con las mismas especies entregadas por el adjudicatario al Gobierno, y que ciertamente no fueron en su totalidad monedas al contado, sin que valga decir que el acreedor no está obligado á las resultas de las operaciones de desamortizacion; por que esta y aquellas fueron prescritas por la ley; á que todos debian prestar obsequio, y por que el Gobierno no podia conservar en su poder estos bienes, cuando la intencion del Legislador habia sido que pasaran á manos de los particulares.

Por estas razones el fiscal pide al Tribunal se sirva revocar la sentencia de 1ª instancia, y mandar que en caso de estimar justa la deuda, esta sea satisfecha de alguna de las dos maneras indicadas.—México 21 de Febrero de 1872.

Es copia que certifico.—*Cirio Tagle.*

#### *Sentencia del Tribunal de Circuito.*

México, Mayo 18 de 1872.—Vistos estos autos promovidos por el Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante contra el Erario Federal, sobre que este le satisfaga como subrogatario en los derechos y obligaciones del clero, la cantidad de veinticinco mil pesos que le debía la Provincia de Agustinos de esta Ciudad; la sentencia de 30 de Octubre de 1871 en que el C. Juez primero de lo Civil, fungiendo en el negocio como de Distrito, por recusacion de uno y excusa del otro de los dos del ramo, con arreglo á las leyes 14 tít. 13 part. 5ª, 114, tít. 18 part. 3ª de la Doctrina de Escribano artículo Subrogacion, y del Alfaro, de Oficio fiscal, gloza 18 número 36, declaró, que la Na-

cion ó el Fisco Federal era deudor al Dr. Aguilar y Bustamante y debía pagarle los veinticinco mil pesos que le demandaba, sin hacer mencion de réditos y costas por no estar convenidos, y gozar el subrogatorio de todos los derechos que gozaba aquel, en cuyo lugar se subrogó, y porque al Fisco no se condena en costas; la apelacion interpuesta por el C. Promotor fiscal y por el Dr. Aguilar; el auto de 3 de Noviembre en que se admitió la apelacion del C. Promotor y se desechó la del Dr. Aguilar; lo pedido por el C. Fiscal; lo expuesto en el acto de la vista por el C. Lic. Luis G. de la Sierra á nombre del citado Dr. Aguilar; con lo demas que se tuvo presente y ver convino.

Considerando primero: que la demanda interpuesta y con que dió principio este juicio, es contradictoria, porque si el autor determinó entablar la accion personal, no debió perseguir la hipoteca como lo hizo pidiendo la finca hipotecada que habia ya pasado á tercer poseedor, sino dejarlo en paz, como dispone la ley 14, tít. 13 part. 5ª; y si quiso deducir la accion hipotecaria, no debió dirigirse contra el deudor principal.

Considerando segundo: que esa contradiccion hace inadmisibile la demanda, conforme á la ley 7ª tít. 10 part. 3ª.

Considerando tercero: que la respectiva demanda es ademas viciosa, porque se pidió en ella la finca hipotecada, siendo así que la hipoteca no dá la propiedad ni el usufructo, ni la posesion de la casa, sino simplemente el derecho de pedir su venta si no se paga la cantidad asegurada, (Escribano, artículo Acreedor hipotecario), y porque se dirigió esa peticion al que no era poseedor de la casa, contra lo dispuesto en la ley 29, tít. 2, part. 3ª.

Considerando cuarto: que atentas las disposiciones del tít. 13, de la ley de 5 de Febrero de 1861 que trata "de las responsabilidades de los bienes nacionalizados," no podia el actor demandar, como lo hizo, el pago de la deuda al Supremo Gobierno, porque suponiendo que fuese legitima y no tu-

viese la nulidad de que hablan el artículo 86 de dicho título y su aclaración de 18 de Febrero, de 1861 y que por el crédito fuese responsable la Nación; lo único á que tenía derecho el acreedor, según el artículo 82, era á que se le reconociese por el Tesoro Federal y se le abonase el seis por ciento anual, y no á que se le pagase de pronto como demandó.

Considerando quinto: que sin embargo de todo lo expuesto, el Juez admitió la demanda, y siguiendo el juicio en rebeldía (aunque sin previa declaración); falló condenando á la Nación al pago de los veinticinco mil pesos demandados, y no á la adjudicación de la casa hipotecada que fué lo que pidió el actor, con lo que la sentencia resultó disconforme á la demanda, contra lo prevenido en la ley 16, tít. 22, part. 3ª.

Considerando sexto: que comenzado, seguido y terminado con tantos vicios ó irregularidades, este juicio en que á consecuencia de no haber contestado la demanda el Promotor fiscal y desatendido absolutamente la defensa de la Nación, no hubo debate, pruebas, ni alegatos, no es posible en la segunda instancia fallar sobre lo sustanciado, esto es, si tiene ó no derecho el Dr. Aguilar y Bustamante á que se le pague el capital y réditos que cobra, y quien y como debe hacer el pago, aun atenta la disposición de la famosa ley 2, tít. 16 lib. 11 de la Nov. Recop., porque no está bien examinada y probada la verdad.

Por todo lo expuesto, y con fundamento de las leyes y doctrinas citadas, Primero: Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara: que la Nación no está en el deber de pagar al Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante, ni en los términos en que él mismo lo pidió, ni en los que refiere la indicada sentencia, al menos por ahora. Se deja al mismo Dr. Aguilar y Bustamante á salvo los derechos que pueda tener para que de nuevo los deduzca como, cuando y ante quien corresponda, á cuyo efecto se le devolverá su escritura, quedando copia cer-

tificada de ella en autos. Tercero: Remítase al Supremo Gobierno copia de este auto por conducto del Ministerio de Hacienda para su debido conocimiento. Cuarto. Hágase saber el mismo auto, y con el testimonio respectivo, devuélvanse los de la materia al Juez que los elevó para los efectos legales; previniéndole al promotor C. Francisco G. Moctezuma, cuide en lo sucesivo de promover las defensas de la Hacienda pública, con la debida eficacia, como es de su mas estrecha obligación; apercibido de lo que haya lugar si no lo verifica. Así por mayoría lo proveyeron los CC. Magistrados que forman la primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, fungiendo como de Circuito y firmaron.—Posada.—J. M. Herrera y Zavala.—J. M. Guerrero.—A. Zerecero.—R. Rodríguez.—Cirio P. de Tagle, secretario.

Es copia que certifico. México Junio 19 de 1872.

#### *Pedimento del C. Procurador General de la Nación.*

El Procurador General de la Nación dice: En 4 de Octubre de 1870 se presentó al Juzgado 1º de Distrito de esta capital el Dr. Javier Aguilar y Bustamante, demandando á la Hacienda pública por la cantidad de veinticinco mil pesos, que con la escritura que corre al principio de los autos acreditaba haber prestado á la extinguida Orden de S. Agustín, con hipoteca especial de la casa número 5 de la calle real del Niño Perdido, al mismo tiempo pedía se le hiciera pago de dicha cantidad con la finca hipotecada.

Después de varios incidentes y artículos, por los que pasó este negocio, y no habiéndose logrado ningún avenimiento entre el representante del Fisco y el Dr. Aguilar, en la junta convocada para el efecto, el Juez 1º del ramo civil que conocía de este jui-

de declaró, (por sentencia de 30 de Octubre del año próximo pasado]: «Que la Nación ó el Fisco federal es deudor al Dr. Aguilar y Bustamante y debe pagarle los veinticincomil pesos que le demanda», no haciéndose mención de réditos y costas por no estar convenidos aquellos y por que al Fisco no se condena en costas. De este fallo apeló el Promotor fiscal, y admitido el recurso, pasaron los autos al Tribunal Superior.

En segunda instancia la sentencia fué por el contrario, adversa al Dr. Aguilar; declarándose en ella, que la Nación no está en el deber de pagar á dicho Señor, ni en los términos que él mismo lo pidió, ni en los que refiere la de primera instancia, al menos por ahora; y dejando á salvo, al mismo Señor, los derechos que pueda tener para que de nuevo los deduzca, como, cuando y ante quien corresponda, (fojas 8 y siguientes del Toca de segunda instancia). Interpuesto por el agraviado el recurso de súplica de esta decisión, fué admitido, y en consecuencia se remitieron los autos á esta Suprema Corte.

Como uno de los fundamentos de la sentencia de segunda instancia para desochar la demanda del Dr. Aguilar, ha sido, que es contradictoria, dándose por razón que si el actor determinó entablar la acción personal no debió perseguir la hipoteca como lo hizo, pidiendo la finca hipotecada que había ya pasado á tercer poseedor, sino dejarlo en paz como dispone la ley 14 título 13 P. 5; y si quiso deducir la acción hipotecaria, no debió dirigirse contra el deudor principal, (fojas 8 vuelta del Toca), es preciso examinar antes que todo, en esta cuestión, si la demanda cumple en cuanto á su forma con los requisitos legales, y cual es la acción intentada en ella.

La contradicción se ha hecho consistir, en que «si el actor determinó entablar la acción personal no debió perseguir la hipoteca, como lo hizo pidiendo la finca hipotecada que había ya pasado á tercer poseedor, sino

dejando en paz, como previene la ley 14 título 13 P. 5; y si quiso deducir la acción hipotecaria, no debió dirigirse contra el deudor principal», (fojas 8 vuelta del Toca). Mas examinando con imparcialidad la demanda, es preciso confesar que no existe tal contradicción. El Dr. Aguilar no persigue la hipoteca, y la misma sentencia de segunda instancia lo comprueba al reprochar á este Señor (fojas 9), el no haber dirigido la demanda contra el poseedor de la finca hipotecada, ni pedido el embargo de esta, ni su venta en subasta pública; pues siendo todo esto lo único á que da derecho la acción hipotecaria y lo que precisamente la constituye, es evidente que no habiéndolo pedido al actor, no se puede decir que ha interpuesto semejante acción. Lo que propuso y ha pretendido el actor, es, que se le hiciera pago de la cantidad que demandaba con la mencionada finca; pretensión que en nada se parece á la acción hipotecaria, y que aunque insostenible, considerada como un derecho que se pudiera hacer valer ante la autoridad judicial, por ser únicamente materia de arreglo particular con el Gobierno al verificar el pago con la finca hipotecada, sin embargo, no implica contradicción, pues ninguna hay en exigir el pago de una cantidad y proponer al deudor satisfacerla con determinada clase de bienes. Supuesto que la demanda no es contradictoria y que la acción ejercitada es la personal contra el Gobierno, como responsable de los gravámenes que reportaban los bienes de manos muertas al tiempo de ser declarados nacionales, resta examinar que clase de responsabilidad tiene el fisco por dichos bienes, en casos como el presente: esto es, si es directa ó subsidiaria.

Si hubiera que atenerse en esta materia únicamente á las prescripciones del derecho común, no cabría duda alguna en que el Dr. Aguilar había estado en su derecho al intentar la acción personal contra el Gobierno, sin perseguir antes la hipoteca; pero hay que tener también en cuenta lo dispuesto



por el reglamento de 5 de Febrero de 1861, á saber: "artículo 81: que la Nacion á cuyo dominio han vuelto los bienes llamados eclesiásticos, es responsable á las cargas que reportaban hasta el 17 de Diciembre de 1857, siempre que estas no pesen sobre las fincas ó capitales reducidas á dominio particular". Al disponer que las cargas que estaban afectadas fincas y capitales reducidos á dominio particular, se debian hacer efectivas en esos mismos bienes, parece que la ley constituyó al fisco responsable subsidiario de ellas, usando del perfecto derecho que tiene el que se subroga en los bienes y derechos de otro, de no responder á los gravámenes de estos sino con los mismos bienes que recibió, y sobre todo, con los bienes que estan especialmente afectados á esas mismas cargas.

Por tanto, el Procurador General, pide á los ciudadanos Magistrados que conocen de este negocio, si creyeren fundada la interpretacion que se ha dado á las disposiciones del reglamento de 5 de Febrero, se sirvan declarar, que no siendo el fisco responsable directo sino subsidiario de las cargas que reportaban los bienes nacionalizados cuando dichos gravámenes pesaban sobre bienes determinados, y que habian pasado á dominio particular como sucede en el presente caso, (escritura de fojas primera y siguiente y testimonio de fojas 37), no es admisible la demanda intentada por el Dr. Aguilar contra el tesoro Federal, por no haber ejercitado antes la accion hipotecaria como previene la ley.

México, Enero 28 de 1873.—*Altamirano.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Setiembre 2 de 1873. Vistos en grado de súplica los autos segundos por el Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante contra el fisco federal, sobre el pago de

veinticinco mil pesos, que el primero ha demandado al segundo como subrogatario de los bienes del clero, conforme á las leyes respectivas de Reforma. Vistas las actuaciones de primera y segunda instancia, con las sentencias correspondientes. Vistos en la tercera instancia, lo pedido por el C. Procurador general de la Nacion; lo alegado al tiempo de vista por el C. Lic. Pedro Diaz Barreiro, patrono del Dr. Aguilar y Bustamante; lo que expuso el C. Procurador general, con todo lo demas que de autos consta y ver convino.

Considerando: que Aguilar y Bustamante ha fundado su accion contra el Fisco Federal por los veinticinco mil pesos que le demanda, en las escrituras, una de 25 de Noviembre de 1851, y la otra de 23 de Junio de 1856, otorgadas ambas ante el Escribano D. Francisco Calapiz, y cuyo contenido es el siguiente: "En la Ciudad de México á 25 de Noviembre de 1851, ante mí el Escribano y testigos, el M. R. Padre Provincial del orden de Agustinos, Fray Antonio Cruz, de esta vecindad, á quien doy fé conozco, expuso: que por decreto del V. definitivo pleno, expedido unánime consenso, el día 7 de este mes, usando de su autoridad y derechos, le fué concedida al otorgante amplia facultad, cuanta es necesaria, para que por sí, sin necesidad de conocer, escuchar y reunir á su V. definitivo, pueda tratar, decretar y definir sobre cualesquiera asunto relativo á las fincas, censos activos y pasivos, alhajas y cualesquiera otros bienes de la provincia y conventos, cuyo decreto que se halla á fojas ciento cincuenta y nueve vuelta del libro de acuerdos del dicho convento, doy fé haber visto, leído y devuelto: que en consecuencia, usando de las facultades expresadas y teniendo necesidad de cantidades de pesos para la reposicion de las fincas de la provincia y convento, ha recibido con tal objeto del Sr. Dr. Francisco Javier Aguilar, la cantidad de veinticinco mil pesos en plata fuerte del cuño mexicano; de la que se da por recebi-

do como si le fuera de presente entregada, renunciando por lo mismo la escepcion de la non numerata pecunia, de la ley novena título primero partida quinta que de ello trata, y de los dos años que en ella fija para reclamarla, los que dá por pasados como si efectivamente lo estuvieran, y se obliga á satisfacer al referido Sr. Dr. Aguilar los mencionados veinticinco mil pesos en el plazo y término de cinco años que deben correr y contarse desde esta fecha; de modo, que satisfará la expresada suma en fin del año de 1856, lo que ejecutará lisa y llanamente sin contienda ni figura de juicio, y si lo hubiere, pagará así mismo las costas y salarios de la cobranza en la forma ordinaria, deferido su monto y liquidacion en el simple juramento de la parte, sin otra prueba, de que le releva, á lo cual se obliga por sí y en representacion de la provincia y conventos, en virtud de las facultades que como arriba se ha expresado le han sido conferidas por el V. definitivo, renunciando, como expresamente lo hace, de todas las leyes, beneficios y demas que le favorezcan. Y al cumplimiento de todo lo aquí relacionado y en el concepto de que la expresada cantidad la ha recibido del Sr. Dr. Aguilar por hacer bien y buena obra á la provincia y conventos, y por lo mismo sin causa de reditos, obliga los bienes y en especial la casa número 5 de la calle real del Niño Perdido, valuada en mayor cantidad, y que produce ciento treinta pesos lo menos de renta mensual, y con ellos se somete al fuero y jurisdiccion de los Sres. Jueces y Justicias de la Nacion, que de sus causas puedan y deban conocer segun derecho, para que lo compelan y apremien como por sentencia consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, renunciando las leyes de su favor y defensa con la que prohíbe la renunciacion de ellas; y advierte, que la presente escritura puede registrarse por el Sr. Dr. Aguilar si bien le pareciere; y en el caso de que por las consideraciones que dispensa á la provincia y conventos, y por

las cuales le manifiesta su profunda gratitud y durable agradecimiento, no procediere el mencionado Sr. Dr. al registro en el término que la ley señala, se le proroga por todo el que sea de su agrado, así como consiente expresamente en que si al mismo Sr. conviniera, en tal virtud procediere á la cesion, venta ó enajenacion cualesquiera que sea, de la presente escritura, podrá la que en tal virtud se otorge, ser registrada por el mismo Sr.; y la persona ó personas ó corporacion á que pase esta escritura, procedera al registro, hipotecando especialmente la mencionada casa número 5 de la calle real del Niño Perdido en esta ciudad, dándose á la hipoteca la antigüedad y prelación correspondiente. Y estando presente el Sr. Dr. D. Francisco Javier Aguilar á quien tambien doy fé conozco, é impuesto del contenido de esta escritura, la aceptó en todas sus partes segun se contiene. Y así lo otorgaron y firmaron, siendo testigos D. José Acosta, D. Ignacio Torcida, y D. Antonio Mutio, de esta vecindad. Doy fé—*Fray Antonio Cruz, Provincial.*—*Dr. Javier Aguilar y Bustamante.*—*Francisco Calapiz.*—Escribano Nacional y Público.

“En la Ciudad de México, á veinte y tres de Junio de mil ochocientos cincuenta y seis, ante mí el Escribano y testigos, parecieron el Sr. D. Javier Aguilar y Bustamante, Cura propio de la Parroquia de Santa Catalina Martir de esta Ciudad, y el M. R. P. Fray Antonio Cruz, Provincial del convento grande de N. P. S. Agustin de esta Ciudad, á quienes doy fé conozco; dijeron, que siendo notorias al primero las escaseces del convento y la imposibilidad para la redencion del capital, ocurrió el R. P. Provincial al dicho primer otorgante para que le prorogara el tiempo por tres años; y habiendo accedido á su solicitud, el Sr. Dr. Aguilar otorga, que dejando en su fuerza y vigor esta escritura y sin que se entienda novacion de contrato, proroga dicho tiempo por tres años contados desde hoy, continuando



el capital y réditos en poder del convento, bajo las mismas bases hipoteca y anterioridad que expresa la escritura de estas fojas, la cual se registrará en el libro de hipotecas como si hoy se hubiese estendido y otorgado, consintiendo se anote al margen de la original la presente próroga." "Y estando conforme el M. R. P. Provincial, otorga á nombre de su convento que está conforme con el presente instrumento que firmaron, siendo testigos D. José Díaz, D. Manuel Meneses y D. José Calapiz de esta vecindad. Doy fé.—*Fray Antonio Cruz, Provincial.*—*Dr. Javier A. de Bustamante.*—*Francisco Calapiz, escribano público.*"

Considerando: que las palabras expresas, terminantes, precisas, en que se celebró el contrato á que se refieren las escrituras insertas en esta sentencia, prueban de una manera evidente, que lo que se hipotecó, lo lo que se gravó, lo que se quiso que quedara afectado al pago de los 25.000 pesos, fueron los bienes de la ex-provincia de Agustinos de esta Capital, y principalmente la casa número 5 de la calle real del Niño Perdido, que para asegurar el pago se hipotecó especial y señaladamente.

Considerando: que conforme á la ley 10, tit. 33, part. 7ª, aquel á quien está prohibido enagenar una cosa, se entiende que lo está prohibido empeñarla ó gravarla, por que como enseñan los autores, la hipoteca ó el gravámen producen los mismos efectos que la enagenacion.

Considerando: que los bienes que se hipotecaron ó gravaron, fueron eclesiásticos, y que estos, por las leyes y cánones vigentes cuando se celebró el contrato, estaba prohibido que se enagenasen si no se llenaban las condiciones que ellos mismos establecieron.

Considerando: que esas condiciones son: Primera: la de la ley primera tit. 14 part. primera, que expresa las razones por que se pueden enagenar los bienes de la iglesia, en estos términos: "Para pagar una deu-

da que no se pueda cubrir de otra modo; para redimir al pobre; para dar de comer á los pobres en tiempo de hambre; para fabricar una iglesia; para comprar terreno para el cementerio de la misma; para hacerse la iglesia de una propiedad mejor que la que enagena; para deshacerse de heredades de que no saque provecho alguno. Segunda: Lo que previene la ley 63, tit. 18 partida tercera sobre la manera en que deben hacerse las escrituras de cosa raíz por una iglesia ó monasterio, que ordena se comience precisando la causa legal de la venta, "que ha de hacerse con otorgamiento ó con placer de fulan, arzobispo, obispo ó abad que es su perlado ó su mayoral, así como parezca por la carta del otorgamiento, que es sellada con su sello." Tercera: Las prevenciones del Concilio Mexicano, tit. octavo libro 3, párrafo segundo, y del Canon 52, caus. 12. quest. segunda, que dicen: la primera; "ningun capítulo, hermandad, comunidad ó ecónomo, haga gastos de los bienes eclesiásticos para edificar iglesias ó para otros objetos, ni pueda enagenar aquellos *sine expreso Episcopi consensu*;" y el segundo determina: "que para la enagenacion, medíase el consentimiento de todo el clero y la autoridad del obispo." Cuarta: Las disposiciones de la legislacion mexicana sobre licencia previa del Gobierno para las ventas, enagenaciones, imposiciones y redenciones contenidas en las leyes de 20 de Noviembre de 1833, 19 de Noviembre de 1846 y circulares de 24 de Diciembre del mismo año de 1833; 3 de Julio de 1834, 4 de Agosto de 1838, 20 de Octubre de 1841, que repitiendo la prohibicion sobre enagenacion de bienes eclesiásticos sin licencia del Gobierno, manda se suspenda á los escribanos que hayan autorizado las escrituras, y que se consigne á los jueces el conocimiento del valor ó nulidad de los contratos; y finalmente, la circular de 27 de Junio de 1842, en la que se reencarga el cumplimiento de varias de las órdenes referidas, y se prohíbe á los escribanos se presten á otor-

gar escrituras de venta ó enagenacion de los bienes de conventos y provincias de regulares, sin que se les haga constar la licencia del Gobierno, la cual deberán insertar literalmente en el instrumento.

Considerando: que de las escrituras que quedan referidas, la segunda de proroga por tres años, se otorgó á continuacion de la copia de la primera y en los dias en que se dió la ley de desamortizacion de bienes eclesiasticos; y que á ambas faltó la justificacion de necesidad, piedad ó utilidad; la licencia en forma del deslinitorio de la ex-provincia de Agustinos; la del arzobispado de la diócesis de México y la del Supremo Gobierno, sin todo lo que deben declararse nulas, y por consiguiente no pueden fundar legalmente la accion que el Dr. Aguilar ha ejercitado contra el fisco federal; por las consideraciones expuestas y con fundamento de las leyes, cánones y circulares citadas; se falla con las proposiciones siguientes: Primera: Se revoca al auto suplicado del Tribunal de Circuito de México de 18 de Mayo de 1872. Segunda: Se absuelve al fisco federal de la demanda que el Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante interpuso sobre el pago de veinticincomil pesos. Tercera: Remítase copia de esta sentencia al Supremo Gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento.

Devuélvase las actuaciones á la primera Sala del Tribunal Superior del Distrito en calidad de Circuito, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Azaa.*—*Simon Guzman.*—Por enfermedad del Sr. Secretario.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial.

Es copia. México, Setiembre 13 de 1873.  
—*Alejo Gomez Eguarte.*

## COMISO

*Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Sonora contra la casa de comercio «Sestier é Ibarri» de Guaymas, por suplantacion en calidad de varios barriles de pólvora.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guaymas de Zaragoza, Abril 9 de 1873.  
—Visto el presente juicio de comiso, promovido por la administracion de la Aduana marítima de este puerto, contra la casa de comercio del mismo, «Sestier é Ibarri», por suplantacion en calidad de treinta barriles de arroba de pólvora fina, manifestados como de minas, ó importada á la consignacion de dicha casa, por el pailebot americano «Undine» procedente de San Francisco; y

Considerando: que consta de autos sin que lo haya desmentido ó contradicho en los debates la parte responsable; Primero: que fondeado el expresado buque, Don Juan Muller solicitó y obtuvo permiso de la administracion de la Aduana para comenzar su descarga antes de presentar el respectivo pedimento con los documentos necesarios, alegando la necesidad de aligerar aquel para poderlo atracar al muelle el mismo dia, con la marea baja (fojas 4 frente y vuelta). Segundo: que abusando de esta gracia, el mismo Señor Muller hizo descargar solamente la partida de 150 barriles de pólvora, consignados á la respectiva casa, y entre los que se encontraban los treinta en cuestion, manteniéndolos á bordo del pango de desembarco y haciendo entender al ciudadano comandante del resguardo, que en esto consistía el permiso obtenido, (fojas 1.<sup>a</sup> frente). Tercero: que de dicho pan-